Para este año se espera que el déficit fiscal se reduzca a un 2,5 por ciento y a un 2,3 por ciento en el 2018.

Meses atrás, el Gobierno aseguró que cumplirá con las metas fiscales, en busca de una serie de reformas para impulsar la economía.

Para financiar el déficit fiscal, el Gobierno espera emitir bonos en moneda local en lugar de un préstamo contingente de 2.500 millones de dólares ya concertado con el Banco Mundial.

La Gran Prueba

El año 2017 será la prueba de fuego para el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que, como se sabe, dirige una administración con un número apreciable de economistas y especialistas destacados en la gestión pública y privada. Ellos deberán enfrentarse a un entorno complejo, con cifras a la baja desde hace cuatro años y con una inversión privada que, de acuerdo con la mayoría de especialistas, mejorará sin el ritmo deseable luego de la caída de casi seis puntos porcentuales este año.

Recientemente, el Banco Central de Reserva (BCR) redujo su proyección de crecimiento económico para este año de los 4,5% estimado en setiembre a 4,3%. En esta proyección se atribuyen los mejores resultados a los sectores Construcción (3,6%) y Manufactura no primaria (1,7%), y en general a la expansión de la inversión privada (5%). El BCR también estima que las exportaciones crecerán 5,5%, el consumo privado 3,8% y el consumo público 3%.

Se espera que este año la economía peruana tenga una evolución menos angustiante que la del año 2016, marcada significativamente por el proceso electoral y por una fuerte caída de la inversión privada que llevó a sujetar el PBI, como en los mejores tiempos del país monoproductor, al comportamiento del sector Minería, especialmente el cobre.

Por la misma razón, los mejores resultados están asociados a un mejor clima para la inversión privada, radicado en dos procesos: por un lado, el destrabe de los proyectos de inversión y, por el otro, la mejora de la confianza para las nuevas inversiones. Desde el ámbito empresarial se ha insistido en que un factor crucial para los mejores resultados sería la desregulación, especialmente la flexibilización laboral, aunque las condiciones políticas que se presentan el 2017 no hacen posible prever que estas iniciativas desreguladoras se concreten.

Falta saber el impacto que tendrá en la economía el paquete de decretos legislativos que se dictaron hasta el 7 de enero y que según se ha señalado incluyen 80 normas además de las ya dictadas. Hasta ahora, el estimado del impacto de estas medidas no ha sido promisorio. Aun así, debe señalarse que las medidas tributarias tendrán algún efecto de liquidez para

mejorar el comportamiento del sector consumo y en otros casos reducir el tirón restrictivo del gasto público que ya se aprecia. En ese camino son también positivos los decretos que crean el nuevo fondo de infraestructura pública cuyos recursos provendrán del excedente del Fondo de Estabilización Fiscal.

En referencia a la inversión pública, el Gobierno deberá sincerarse respecto a los grandes proyectos de infraestructura, sobre los cuales ha mantenido desde agosto una actitud ambivalente, con discursos positivos con poco efecto práctico. Debe resolver sobre todo lo concerniente al Gaseoducto del Sur y a la Refinería de Talara, y encarar el retraso de la inversión pública. El estimado de su incremento de 4,5% el 2017 luego de la caída de 7,5% el año 2015 y un crecimiento de casi cero este año (0,1%) es una condición indispensable para un resultado satisfactorio final.

